

REINO UNIDO

LIBERTAD DE MOVIMIENTO EN EUROPA MÁS RESTRINGIDA

El primer ministro británico, David Cameron, ha hecho público en un artículo publicado el día 27 de noviembre en el *Financial Times* su visión de cómo debería tratarse la libertad de movimiento dentro de la Unión Europea y la necesidad urgente de cambiar las normas que la regulan.

Preocupado por la inminente supresión de las restricciones de controles fronterizos para nacionales procedentes de Rumania y Bulgaria a partir del 1 de enero próximo, el primer ministro quiere cambiar las reglas para que nadie pueda llegar a Reino Unido y esperar obtener beneficios sociales inmediatamente. Entre las medidas que propone se encuentran:

- No se tendrá derecho a solicitar beneficios sociales durante los primeros tres meses desde la llegada del inmigrante a Reino Unido. Transcurrido el primer trimestre, tampoco se abonarán indefinidamente. Solo podrán reclamarse por un tiempo máximo de seis meses, en el caso de que puedan demostrar que tienen auténticas perspectivas de empleo.
- También se endurecerán los requisitos para acceder a las ayudas públicas y se impondrá un nuevo umbral mínimo de ingresos. Si no se cumplen estos requisitos, se interrumpirá la posibilidad de acceder a prestaciones sociales, como el denominado complemento a los ingresos.
- Tampoco tendrán derecho a recibir la ayuda a la vivienda los demandantes de empleo recién llegados.
- Propone deportar a los que mendiguen y a los “sin techo”, no permitiéndoles la entrada durante un plazo de 12 meses.
- Quiere imponer medidas drásticas a aquellas empresas que contraten trabajadores por debajo del salario mínimo, imponiendo multas de hasta 20.000 libras por cada trabajador.

El primer ministro dice contar con el apoyo de otros países europeos también afectados por el flujo masivo de inmigración, como son Austria, Alemania y Países Bajos y trabaja conjuntamente con éstos para abordar el concepto de la libertad de movimiento a una base más razonable, sugiriendo que una posibilidad sería la de exigir a un nuevo país que alcance un determinado nivel de renta per cápita antes de tener acceso pleno. Además de poder conferir a los Estados Miembros la posibilidad de imponer cupos a la inmigración procedente de la UE cuando se hayan alcanzado un cierto nivel dentro de un mismo año. David Cameron intentará en la cumbre que tendrá lugar hoy en Lituania buscar apoyos entre sus socios europeos para limitar el derecho a la libre circulación.

Las nuevas propuestas del primer ministro británico vienen a endurecer, aún más, la política migratoria del Gobierno de coalición, dado que en estos momentos se está tramitando en el Parlamento el proyecto de Ley de Inmigración. Éste proyecto se crea con el fin de impedir a los inmigrantes usar los servicios públicos a los que no tienen derecho, reduciendo así el efecto llamada que anima a los extranjeros a venir a Reino Unido y facilitar la expulsión de aquellos que estén ilegalmente en el país, asegurando que el sistema de inmigración trata de manera favorable a los inmigrantes legales y trabajadores mientras que adopta medidas contundentes contra aquellos que se encuentran en el país de forma ilegal.

Antecedentes

En su programa electoral el partido conservador tocaba el tema de la inmigración. Aunque se decía que este fenómeno contribuía a enriquecer la nación, el partido liderado por David Cameron prometía reducir el saldo migratorio a decenas de miles al año, pero no daba ningún detalle de cómo lo llevaría a cabo. Asimismo, también prometía limitar la inmigración, frenar la llegada de trabajadores no cualificados y controles de transición para los nuevos miembros de la UE, si bien dejaba claro que un Gobierno liderado por el partido conservador no tendría forma de restringir la llegada de trabajadores europeos.

En febrero de 2012, el Ministerio de Interior anunciaba que los inmigrantes extracomunitarios que residieran en el país deberían ingresar un salario mínimo anual a concretar para poder permanecer en el país una vez pasados cinco años.

En junio de 2012, el primer ministro declaraba que Reino Unido estaba preparado para tomar medidas y evitar un flujo masivo de inmigrantes procedentes de Grecia si el país abandonaba la eurozona.

En octubre de 2012, David Cameron, en respuesta a las inquietudes expresadas en el seno del congreso anual de su partido, anunciaba que pensaba revisar la directiva sobre libertad de movimiento de los inmigrantes comunitarios para residir y trabajar en el Reino Unido.

En enero de 2013, el Gobierno británico propone iniciar una campaña de imagen negativa del país para disuadir a los nacionales de Rumania y Bulgaria de venir al país. El plan consistía en amplificar los aspectos negativos de la vida en Gran Bretaña y exigir que vengan con medios suficientes para su manutención al menos 6 meses, así como con un seguro privado.

En febrero de 2013, el ministro de Trabajo y Pensiones, Iain Duncan Smith, manifestaba que el Gobierno tenía la intención de obligar a que los inmigrantes comunitarios residieran en Reino Unido durante un año antes de que pudieran ser beneficiarios de prestaciones. Recalcando que el Gobierno se había comprometido con el electorado a reformar los reglamentos comunitarios con el objetivo de poner fin al flujo de inmigrantes que se aprovechan de las ventajas del sistema público de prestaciones.

En marzo de 2013, el Gobierno empezó a examinar fórmulas para frenar la inmigración. Ante la inminente llegada de los inmigrantes procedentes de Rumania y Bulgaria, se proponen medidas que van desde un endurecimiento de las condiciones para tener acceso a la vivienda, a las prestaciones sociales y a la atención médica hasta la posibilidad de que todas las prestaciones sociales sean de tipo contributivo, lo que significaría que sólo aquellos que hayan vivido y cotizado en el país tendrían derecho a ellas.

En julio de 2013, el Gobierno proseguía con su campaña contra el uso ilegítimo de los servicios públicos sanitarios de los residentes no británicos, buscando incluir una tasa para todos los inmigrantes que se queden en Reino Unido más de 6 meses.

Por último, en octubre de 2013, la ministra de Interior, Theresa May, presentaba en el Parlamento el proyecto de Ley de Inmigración, que en estos momentos se encuentra en trámite parlamentario.